

Vecinalismo y autogestión. ¿Adiós a los partidos políticos?

José Miguel Candia

Resumen

Durante los primeros años de la década de los ochentas surgen, en varios países de América Latina, organizaciones sociales que agrupan a vecinos y pobladores preocupados por ser ellos los protagonistas encargados de resolver los problemas de sus comunidades. Estos movimientos vecinales representan una nueva modalidad de participación ciudadana y gestión de los intereses colectivos y expresan, al mismo tiempo, una profunda desconfianza hacia los antiguos partidos políticos. Este fenómeno es el resultado de la confluencia de diversos factores, entre los que cabe destacar los efectos de descomposición y debilitamiento que provocaron los programas neoliberales en las agregaciones sociales que habían tenido un papel fundamental en la vida de nuestros países, tales como la clase obrera industrial y las fuerzas políticas vinculadas a ella. En este artículo el autor describe las experiencias del movimiento vecinal en Argentina, como un caso paradigmático de este proceso de aparición de agrupamientos comunales divorciados de los partidos políticos y en abierta competencia con ellos.

Abstract

During the early 1980s, Latin American social organizations came out strongly in inner-city politics and became very active within their communities by setting up mechanisms not only to address but also to solve their problems. These movements represent a new form to partake collectively and to take action against old institutional forms of representation; and they basically question political parties for having no institutional legitimacy. Such programs coming out of neoliberalism, clearly have affected social groups, and adversely so, and they have led to subsequent reactions, particularly in the industrial areas. In this article, the author shows Argentina's urban movements as paradigmatic cases of the new social phenomenon going on, and it also depicts the political party's lacking institutional legitimacy to represent people's needs and interests.

América Latina: el cambio de rostro

Inicio y fin de milenio. Son años particulares para nuestros países. Los cambios derivados de las políticas de modernización capitalista hicieron tabla rasa con buena parte del abultado aparato estatal que se construyó en los últimos 40 años. Se modificó el carácter y se redujeron las funciones de las instituciones de seguridad social; fue amputado un segmento importante de la antigua industria nacional que se reconvirtió en plantas maquiladoras o mutó en oficinas gestoras de importaciones; se cancelaron los subsidios y créditos sobre los cuales se habían instrumentado las políticas de estímulo a los productores locales e hicieron posible que se otorgara un generoso apoyo al consumo popular.

No exageran algunos investigadores cuando dicen que la situación social de América Latina es un escándalo.¹ A mediados de los años noventas, el 46 por ciento de los habitantes de la región vivía en la pobreza y casi la mitad de ellos, alrededor de 100 millones, era población que carecía de los más elementales recursos para atender necesidades fundamentales. De acuerdo a una definición convencional, aceptada por la mayoría de los organismos internacionales, este enorme grupo de latinoamericanos forma parte de la subcategoría socioeconómica que se identifica como pobreza extrema. El número de pobres era, a finales del siglo que acabamos de dejar atrás, mayor que a comienzos de la década de los setentas. Para 1995 se estimaban 200 millones de pobres, 80 millones más que los registrados en 1970. La cifra, por sí sola apabullante, incluye 95 millones de indigentes, 30 millones más que los identificados hace 30 años.² No obstante, el problema no se agota en el conteo de pobres ni en la expresión de asombro que esas cifras pueden provocar. Existe otro indicador social igualmente aterrador, se trata del aumento de la desigualdad: los ricos son ahora más ricos y el incremento de la cantidad de familias carenciadas –de acuerdo al eufemismo que adoptaron algunos gobiernos para dirigirse a los grupos que viven en condiciones de pobreza extrema– parece estar fuera del control de las políticas públicas. Mientras que el 10 por ciento de los sectores de más altos ingresos se apropia del 47 por ciento de la riqueza generada en la región, el 20 por ciento de las familias más pobres apenas recibe el 5 por ciento del ingreso que se produce en el subcontinente.

La situación que se describe incluye a todas las naciones del área. Algunos países que habían sido excepciones parciales a la regla –en particular los casos de Argentina y Chile– incrementaron notoriamente la pobreza y la desigualdad. Apenas Uruguay y Costa Rica mantuvieron, parcialmente, las condiciones previas a la catástrofe de los ochentas. Puede apuntarse una experiencia, extraña y solitaria, de mejoría relativa: se trata de Colombia, que logró aminorar la brecha de desigualdad social y pobreza pero partiendo de niveles de polarización económica más altos que los registrados en los países que se mencionaron anteriormente. Si se analiza la cuestión social a partir de la lectura de otros indicadores como mortalidad infantil, esperanza de vida y alfabetización, el panorama es algo más alentador; sin embargo, en los últimos 30 años el acceso de las familias pobres a los servicios sociales empeoró. De las naciones que iniciaron de manera más temprana la construcción institucional que los sociólogos y políticos europeos llamaron "Estado de Bienestar", únicamente Uruguay logró escapar a este proceso de decadencia generalizada.³

¹ Guillermo O'Donnell, "Pobreza y desigualdad en América Latina: algunas reflexiones políticas", en Victor Tokman y Guillermo O'Donnell (compiladores), *Pobreza y desigualdad en América Latina. Temas y nuevos desafíos*, Buenos Aires, Paidós, 1999.

² *Ibid.*

³ Ana Sojo, "La política social en la encrucijada: ¿opciones o disyuntivas?", en Jorge Carpio e Irene Novacovski (compiladores), *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*, Buenos Aires, FCE-SIEMPRO-FLACSO, 1999.

América Latina había vivido casi cuatro décadas de constante crecimiento del trabajo asalariado, de expansión del empleo público y de consolidación de los sectores de servicios y comercio. Todos los años, nuevos contingentes de población en edad activa podían acceder al aparato productivo en condiciones de estabilidad laboral y bajo la cobertura de contratos tutelares que incluían diversas prestaciones y beneficios como la seguridad social.

Desde mediados de los años setentas y de manera más pronunciada a partir de la década de los ochentas, las condiciones de ingreso y participación de los buscadores de empleo en el mercado de trabajo cambiaron radicalmente. En efecto, las consecuencias de las políticas de reestructuración capitalista sobre el mundo del trabajo han sido particularmente graves. Un primer fenómeno, de fácil identificación sin necesidad de recurrir a una indagación estadística detallada, es la generalización de formas atípicas de empleo y la degradación de las condiciones laborales. La vastísima producción bibliográfica que se ha dedicado al estudio del tema coincide en agrupar este tipo de actividades laborales bajo la conceptualización común de precariedad ocupacional. No es propósito de este artículo hacer un recuento minucioso del proceso de precarización de las condiciones de trabajo, por lo que sólo se mencionarán algunos de los rasgos que lo definen. De las transformaciones registradas en el mercado laboral, hay cinco elementos que por su relevancia constituyen indicadores sustantivos de la desestructuración de las relaciones de trabajo, por lo que es necesario referir de manera puntual cada uno de ellos:

- a) La fuerte expansión del autoempleo o trabajo por cuenta propia;
- b) La caída relativa del trabajo asalariado en las actividades industriales y el incremento de la ocupación en los sectores de comercio y servicios;
- c) El marcado crecimiento del empleo por tiempo determinado y a jornada parcial;
- d) El aumento del subcontratismo y de la maquila domiciliaria;
- e) El incremento del empleo en relación de dependencia bajo nuevas condiciones contractuales. Este tipo de convenios rompe con dos de los principios que tradicionalmente habían servido de soportes al modelo contractual anterior: la estabilidad en el empleo y la permanencia del trabajador en puestos que eran relativamente similares en las funciones productivas que debían desarrollarse.

La combinación de estos factores y de otros elementos que hacen al funcionamiento del mercado laboral en el contexto de los nuevos criterios de la flexibilidad contractual —como la debilidad o fortaleza del movimiento sindical, sus tradiciones de lucha y el nivel de autonomía de las organizaciones obreras con respecto al Estado y a las empresas— es responsable, en parte, de la mayor segmentación de los sectores asalariados de la población trabajadora, de la crisis de representación que afecta a las grandes centrales obreras y del debilitamiento progresivo de las bases sociales que fueron el sustento de los movimientos populistas de “viejo

cuño" y de las fuerzas políticas de tradición marxista (trabajadores urbanos, empresarios vinculados al mercado interno, burocracia y sectores medios del comercio y los servicios).⁴

Estado y democracia desde la óptica neoliberal

Podemos decir que nuestros países tuvieron más Estado que democracia. Fueron las instituciones públicas el ámbito desde el cual se protegió y estimuló el crecimiento de los empresarios locales, se procuró validar políticamente la participación de las organizaciones obreras y campesinas, se promulgaron leyes laborales avanzadas y se crearon las condiciones propicias para consolidar el mercado interno. Esta estrategia de desarrollo, apoyada en una matriz política "Estado-céntrica", fue parcialmente acompañada por la vigencia de formas institucionales democráticas. Los reiterados golpes militares en algunos países –Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y las naciones de América Central son, entre otros, claramente ilustrativos– o la emergencia de vigorosos movimientos populares que fincaron su legitimidad en el apoyo de las estructuras corporativas y gremiales, contribuyeron a debilitar o restringir el libre juego de los dispositivos propios de la democracia parlamentaria. América Latina llegó a la crisis de los ochentas habiendo conocido unas pocas experiencias de estabilidad institucional: Uruguay y Chile hasta los golpes de 1973; Colombia y Venezuela después de los acuerdos bipartidistas, y en particular Costa Rica a partir del pacto que se suscribió en 1948.

Con propósitos analíticos es factible organizar el debate sobre Estado y democracia, de acuerdo a los postulados de tres concepciones principales:

- a) *El llamado "viejo consenso"*. Este enfoque alude al paradigma que prevaleció en las ciencias sociales latinoamericanas desde los años treinta y hasta mediados de la década de los setentas. Este consenso –entendido como un bloque histórico que posibilitó la instauración de la estrategia de desarrollo basada en la industrialización protegida y en el mercado interno– le asignaba al Estado un papel predominante como factor de estímulo a las actividades productivas y como instancia de protección tutelar de la fuerza de trabajo. Michael Hansenne, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó, de manera transparente, en su Informe Anual de 1992 a la Conferencia Regional Americana, que durante ese periodo, de algo más de cuatro décadas, definir políticas sobre cuestiones laborales era referirse a "la preeminencia del Estado como regulador y garante de las metas de empleo, los sueldos y las condiciones de trabajo; ello sin prestar gran atención al mer-

⁴ Marcelo Cavarozzi, "Populismos y partidos de clase media. Notas comparativas", en Carlos Vilas (compilador), *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*. México, Conaculta, 1996. Para un estudio de la crisis de los populismos latinoamericanos ver: Felipe Burbano de Lara (editor), *El fantasma del populismo*. Caracas, ILDIS (Ecuador)/FLACSO (Sede Ecuador)/Nueva Sociedad, 1998.

- cado y, en la mayoría de los casos, sólo con una participación simbólica de los actores sociales”.
- b) *El enfoque neoliberal*. Desde este marco se afirma que el Estado debería intervenir lo menos posible para no interferir en el libre movimiento de las fuerzas del mercado. De acuerdo a esta perspectiva, las organizaciones sociales y las instituciones y empresas públicas heredadas del antiguo “Estado desarrollista” son impedimentos, y de algún modo una amenaza, para alcanzar la modernización de la planta productiva. Un Estado y una sociedad menos protagónicos son el prerrequisito para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.
- c) *La visión del “crecimiento con equidad”*. El aumento de la pobreza, de la concentración del ingreso y la generalización del subempleo y la desocupación motivó que algunos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revaloraran el papel de la intervención gubernamental en algunos espacios de la vida social, en particular en el ámbito del diseño e instrumentación de los programas de combate a la pobreza y en el mercado de trabajo. Aunque se redefine el rol que deben jugar las instancias públicas, se propone un accionar menos predominante para el Estado del que se le adjudicaba en el “viejo consenso”. El principal punto de divergencia entre este enfoque y los dos anteriores reside en las funciones que se le atribuyen a las organizaciones sociales y a las diversas expresiones *sociales* que pugnan por la gestión directa de los ciudadanos en la producción y distribución de ciertos bienes y servicios básicos.⁵

Lo cierto es que desde inicios de los ochentas América Latina conoció, en carne propia, la implantación de políticas de ajuste, cuando la prioridad era disciplinar las variables macroeconómicas que se descontrolaron con la crisis de la deuda, y poco después, a mediados de esa misma década, la tenaz aplicación de programas económicos destinados a establecer un nuevo patrón de acumulación. Es importante señalar que el recetario de medidas económico-sociales que llegó a nuestros países tenía una cobertura ideológica cuidadosamente elaborada en los medios académicos de los países industrializados. En efecto, el paquete que se exportó a la región tenía dos novedades centrales. Una de ellas era el ensamble de los postulados neoliberales con *valores democráticos* de origen neoconservador. Cabe recordar que en el cuerpo doctrinario del liberalismo clásico las formas institucionales democráticas habían ocupado un lugar expresamente subordinado al instrumental de carácter propiamente económico.⁶

⁵ René Cortázar. “Globalización y puestos de trabajo. Una perspectiva latinoamericana”, en Víctor Tokman y Guillermo O’Donnell (compiladores), *op. cit.*

⁶ Ana María Ezcurra. *¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente*, Buenos Aires, Lugar Editorial/IDEAS, 1998.

El proyecto neoconservador que llegó a Latinoamérica retomaba y vigorizaba la noción de *capitalismo democrático*. Este es un vector clave, ya que forma parte del núcleo constitutivo de un nuevo consenso ideológico que postula la adhesión a la economía de libre mercado y a la democracia liberal y afirma la relación necesaria entre ambos principios. De esta manera, para las naciones del hemisferio Norte la "democratización global" ascendió a la categoría de cuestión de seguridad. En los ochentas, esta racionalidad comenzó a ser gradualmente impuesta en nuestros países, el patrocinio de la democracia parlamentaria en el subcontinente significó un vuelco de la visión conservadora tradicional hacia la idea de que las dictaduras de corte "pinochetista" representaban un escollo para el manejo de la cuestión social y para el establecimiento de un marco institucional que fijara nuevas reglas del juego.

La crisis de los regímenes dictatoriales, en particular en Sudamérica, coincidió con un marcado proceso de valorización de la institucionalidad democrática por parte de amplios sectores del espectro político. Esta oleada de recuperación del pluralismo y de las libertades ciudadanas incluyó a segmentos de la izquierda que habían renegado, durante los años sesentas y setentas, de las formas democráticas, de los procesos electorales y, en general, de todos aquellos dispositivos asociados a la democracia pluripartidista. La misma izquierda que se apresuró a ahogar bajo las consignas atronadoras de la guerra popular y de la insurrección armada a los gobiernos surgidos de las elecciones que se efectuaron diez o quince años antes, propusieron en los ochentas la instauración de un gobierno representativo. Y aquí cabe una aclaración: puede concebirse a la democracia como un método para la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal o bien imaginar la democracia como una forma de vida, como un modo cotidiano de relación entre hombres y mujeres mediante el cual se fijan reglas comunes para llevar a cabo el conjunto de actividades de una sociedad.⁷ Expresado de otro modo, es la diferencia que existe entre una democracia gobernada y una democracia gobernante. En el primer caso la participación popular tiene reservado un papel secundario; de manera periódica, las leyes que norman los procesos electorales convocan a los ciudadanos para que decidan, mediante el voto universal, cuál de las minorías potencialmente dirigentes debe asumir la responsabilidad de ejercer la administración de las instituciones públicas. Una vez cumplido este acto, lo disuelve como "sujeto con identidad propia", el ciudadano pierde estatus como actor colectivo y el pueblo vuelve a sus tareas cotidianas.

Distinto es el caso de la democracia *gobernante* que procura abrir espacios y ampliar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la toma de decisiones de todas aquellas cuestiones que atañen al conjunto de la sociedad. De acuerdo a los postulados de esta concepción, las instituciones democráticas sólo adquieren ese verdadero carácter cuando el pue-

⁷ José Nun, *La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1990.

blo participa en la identificación y solución de los asuntos que conciernen a la comunidad y no exclusivamente en la elección de quienes tendrán a su cargo el desempeño de las funciones públicas.

La normalización de la vida política en los países que dejaban atrás procesos dictatoriales, dio lugar a la instauración de gobiernos democráticos con características que se aproximan a la primera de las tipologías mencionadas. En efecto, la convocatoria a elecciones y el reestablecimiento de la actividad parlamentaria volvió a otorgar centralidad a los partidos políticos y relegó el papel de las organizaciones sociales. La jerarquización de los mecanismos propios de la formalidad democrática redujo los espacios de participación popular que no se expresan bajo las formas convencionales de los partidos.

La primacía de la cuestión local: ¿ebullición ciudadana o fastidio de la política?

Desde los años treinta, el Estado fue percibido en nuestros países como el gran demiurgo de la historia, era el artífice del desarrollo industrial, de la modernización del campo y el garante del bienestar social para las clases populares. Fueron demasiadas esperanzas depositadas en una institución política. Casi 50 años después, y en medio de una fuerte ofensiva neoconservadora, se puso en marcha un proceso de demolición de las antiguas estructuras públicas. Surgió entonces un nuevo tótem: el mercado. Se necesitaron poco más de 20 años para saber que este ídolo tenía pies de barro. Era preciso que golpeáramos la cabeza contra la pared para entender que el mercado sin controles destruía la convivencia democrática y volvía ficticias las libertades ciudadanas. Se produjo entonces una súbita adhesión al concepto de sociedad civil, categoría de larga prosapia que habían rehabilitado los disidentes de Europa del Este en los años setenta y que los sociólogos conservadores estadounidenses recibieron con beneplácito.⁸ En efecto, el ala más tradicional del Partido Republicano comenzó a utilizar la noción de sociedad civil como si se tratara de un sinónimo del "mercado", entendiendo por ella una supuesta esfera privada en la que confluyen consumidores libres, sin restricciones y alejados de la tutela estatal. Por el contrario, las corrientes académicas y políticas progresistas de los Estados Unidos vinculan este concepto a valores y prácticas asociativas y solidarias. Desde esta concepción se procura relacionar las ideas de ciudadanía y sociedad civil en un contexto de experiencias comunitarias basadas en la ayuda mutua y el trabajo voluntario.

Pero el llamado de alerta llegó un poco tarde; este retorno, intelectual y político, al "reino ciudadano" se produjo cuando el daño ya estaba hecho. La mayor segmentación de los grupos y clases sociales que habían sido el soporte estructural y referente político fundante de las sociedades latinoamericanas agotó tam-

⁸ Puede consultarse el detallado estudio sobre los usos del concepto de sociedad civil en la sociología norteamericana en: Benjamin R. Barber, *Un lugar para todos*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

bién los horizontes simbólicos de las fuerzas políticas tradicionales. Esta crisis de representación, notoria a partir de la implantación de la estrategia neoliberal, generó, por parte de segmentos importantes de la sociedad, primero indiferencia y después escepticismo, hacia los partidos históricos. Los que habían sido depositarios naturales de las expectativas populares se transformaron, a los ojos de la población, en fuente de corrupción y de promesas incumplidas.

La réplica a este proceso de descreimiento ha sido el surgimiento de liderazgos locales, más conocidos en sus municipios y comunidades y fuertemente ligados a los intereses inmediatos de sus vecinos. La experiencia argentina sirve para ilustrar este fenómeno de conformación de agrupamientos municipales que han logrado, en muchos casos, salir victoriosos en las elecciones para designar a los titulares de las comunas y a los integrantes de los consejos vecinales.

La emergencia de estas fuerzas de raíz municipal reconoce, en Argentina, algunos antecedentes valiosos de *autogestión popular*. En 1981 se inició la ocupación ilegal de terrenos en la zona sur del conurbano de Buenos Aires, con estos hechos dio comienzo una nueva modalidad de producción del *hábitat* y de organización social de los sectores populares.⁹ Estas ocupaciones ilegales de tierras se caracterizaron por ser masivas y por planificar el uso del suelo y el desarrollo futuro del barrio. A partir de criterios autogestionarios, cientos de familias se instalaban en los predios baldíos, trazaban los lotes y las calles con el fin de asignar un terreno a cada familia, dejar espacios libres para las áreas de uso colectivo, y construir la red eléctrica, las tuberías de agua potable, los centros de salud y guarderías. Si quisiéramos identificar el aspecto de mayor originalidad en este tipo de experiencias, hay que apuntar el particular modo de vincularse con la ciudad que proponen estos nuevos asentamientos. Constituyen un intento de ser reconocidos por las autoridades y, al mismo tiempo, asimilarse al resto del núcleo urbano mediante una política de autoorganización y de hechos consumados.¹⁰ El agrupamiento de los pobladores —que en muchos casos fueron la base de las futuras asociaciones vecinales— se estructuraba a partir de tres instancias: Comisión Directiva, Comisiones Especiales y el Cuerpo de Delegados; los procedimientos para tomar decisiones eran la asamblea y la elección directa.

Es importante señalar un rasgo sustantivo en este tipo de organización autogestiva. Todos los grupos vecinales se construyeron sobre la idea de la autonomía respecto de la competencia político-partidaria. De esta forma los representantes de los vecinos se definían como "apartidarios" o "apolíticos". Esta conducta favoreció la unidad organizativa de los barrios, al colocar la competencia política fuera de sus límites y acotar las diferencias entre vecinos puertas adentro. Puede decirse que había un límite visible entre las organizaciones sociales, surgidas de demandas específicas de la sociedad civil, y el sistema político.

⁹ Denis Merklen, "Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 149, mayo-junio de 1997.

¹⁰ Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal, *Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.

Las agrupaciones vecinales que surgieron durante los ochentas y que se extendieron en los últimos diez años muestran algunos cambios importantes con respecto a las experiencias que se acaban de mencionar. Se mantuvo cierto desdén y desprecio hacia las dirigencias políticas tradicionales pero, al mismo tiempo, se expresó un abierto interés por disputar electoralmente el control de las comunas.¹¹ La señal de identificación que exhiben las organizaciones vecinalistas sigue siendo el descreimiento común que sienten por las antiguas fuerzas políticas. Todas coinciden en un aspecto que puede constituirse en un punto vulnerable: la heterogeneidad de los sectores de población que las conforman. Es posible reconocer a trabajadores de la industria, burócratas y comerciantes, técnicos y profesionales, desempleados y subocupados o grupos marginales cuyo objetivo principal es obtener un lugar donde vivir. La composición ideológica de las bases sociales del movimiento "vecinalista" es variada, en ciertos casos se encuentran expresiones cercanas a corrientes políticas históricas como el peronismo y la Unión Cívica Radical, en otros parecen responder a fuerzas conservadoras de confusa procedencia, incluidos grupos que colaboraron con la dictadura militar. No obstante, las agrupaciones vecinales efectúan sus convocatorias con carácter amplio, sin discriminar por posturas ideológicas o antecedentes partidarios. El objetivo político central es jerarquizar el rol municipal, lograr una mayor autonomía de las comunas y procurar que las elecciones en las que se vota para designar a los presidentes municipales y asambleístas se efectúen de manera separada de las provinciales o federales. Estas banderas, junto a la prédica machacona contra la corrupción y la inseguridad, constituyen el programa mínimo de la mayoría de estas organizaciones.

El vecinalismo abre un espacio de lucha para la persona desempleada que ya no cuenta con un sindicato al cual llevar sus demandas y lograr que lo defienda, y para los trabajadores precarios, los ocupados por cuenta propia, los subempleados y para aquellos que aún teniendo una inserción laboral estable no confían ni se sienten representados por las antiguas estructuras gremiales ni por las ofertas que provienen de los partidos políticos. Desde el Estado se hacen reiterados esfuerzos de cooptación. Durante la última dictadura que gobernó Argentina, en el periodo 1976-1983, se trató de armar lazos con la sociedad luego de los primeros años de terror. Vecinos "reconocidos" de las comunidades eran elegidos para reemplazar a los militares que administraban los municipios. En 1983, con el reestablecimiento de la democracia, algunos decidieron presentarse a elecciones; con este fin crearon sus expresiones vecinales organizadas políticamente.

El núcleo a partir del cual suelen articular su discurso los movimientos vecinalistas es la exaltación de la figura "del buen vecino". Por lo general se trata del ciudadano atraído por los valores que encarnan una "cuidada y austera" administración de los recursos municipales y de la prestación adecuada de los servicios

¹¹ Torcuato Di Tella, "Los síntomas de cierta ebullición", en *Clarín*, Buenos Aires, 22 de abril de 2001.

básicos que se esperan de un Estado mínimo.¹² El éxito electoral de los candidatos vecinalistas se explica, en buena medida, por ser receptores del voto ciudadano que desea expresar su rechazo a la política bajo sus formas conocidas. Se entiende que una manera de "despolitizar" el voto es apoyar a un candidato que se presenta como un "buen vecino", que se hace cargo de la gestión cotidiana de los problemas de su entorno.

Con palabras simples y sin rodeos, Alberto Groppi –uno de los numerosos jefes comunales surgidos del movimiento vecinalista– define los postulados que inspiran a las organizaciones municipales: "El vecinalismo no tiene una ideología a nivel macro. Es ideología simple, un espíritu de servicio permanente por la gente que a uno lo rodea". Otro presidente municipal, Ricardo Ubieto, de la comuna del Tigre, señala que "el corazón del problema está en que se ha roto la relación entre la gente y la política porque ésta ya no resuelve ninguna de las necesidades cotidianas de los sectores sociales... el vecinalismo es la soberanía del bache, de la luz eléctrica, ver cómo prestas mejores servicios y no meterte en los grandes problemas ya que no los vas a solucionar...".¹³

El auge del "vecinalismo", a mediados de los ochentas, coincidió con el surgimiento y multiplicación de las redes solidarias. Un relevamiento, publicado en mayo del 2000, que efectuaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra que hay más de 100 mil organizaciones comunitarias en Argentina.¹⁴ Se trata de entidades de bien público, sin fines de lucro, que se forman con el único propósito de defender las demandas ciudadanas. En el capítulo de conclusiones del documento *Índice de Desarrollo de la Sociedad Civil de la Argentina*, se menciona que estos agrupamientos, que nacen sin patrocinio estatal, duplican a las instituciones educativas y son hasta siete veces más numerosos que los de salud.

En 1996 se creó el Foro del Sector Social con el fin de fomentar la participación ciudadana. En un material de difusión el Foro se pregunta: "¿Qué podemos hacer?" y el mismo texto propone: "Cuidar a un niño solo, cocinar para gente de la calle, acompañar a un discapacitado, leerle a un enfermo. Es que ser solidario no es sólo dar comida sino también dar una mano, ser respetuosos. La sociedad ya maduró. Ya no quiere ser más parte de ese Estado paternalista que se encargaba de todo, ahora la gente tiene iniciativas y actúa".¹⁵

Otro fenómeno de especial relevancia es la aparición de mercados en los que se adquieren y venden diversos bienes y servicios mediante el sistema de trueque. Estos mercados iniciaron a mediados de los noventas, impulsados por miles de

¹² Héctor Pavón, "Los partidos que vienen de los barrios", en *Clarín*, Buenos Aires. 22 de abril de 2001.

¹³ Testimonios citados por Héctor Pavón, *op. cit.*

¹⁴ Mariana Iglesias, "Cada vez hay más redes solidarias en el país", en *Clarín*, Buenos Aires. 26 de agosto de 2000.

¹⁵ Palabras de los dirigentes del Foro del Sector Social citadas en el informe de Mariana Iglesias, *op. cit.*

trabajadores desempleados y subocupados como un mecanismo alternativo al sistema formal de comercio. En apariencia, el sistema de trueque no se diferencia de un acto de compra-venta rutinario, ya que cada artículo tiene un valor en "créditos". Pero estos billetes no son otra cosa que el valor del trabajo que cada persona aporta: no son intercambiables por dinero, tampoco reemplazan a la moneda corriente ni generan ningún interés. Carlos de Sanzo, uno de los fundadores de la Red Global del Trueque Solidario señala que:

... cualquier club de trueque está en condiciones de darle a un desocupado respuesta a cortísimo plazo: barrer o pintar o, quizá su esposa, atender a un enfermo o preparar comidas (...) el trueque funciona como interfase entre el mercado social y el mercado formal y opera en los intersticios de la economía: con las butacas que quedan vacías en el teatro, con las horas que quedan sin trabajar, con la mercadería que queda sin vender.

(...) El primer club de trueque se fundó en 1994. Hoy son más de 800 y hay 90 mil familias cuyo sustento depende total o parcialmente del trueque (...) sumando casi 500 mil personas.¹⁶

Bajo la forma de asociaciones vecinales o mediante este curioso sistema de mercados autogestivos, la sociedad civil busca recomponer lazos de solidaridad que se perdieron con el debilitamiento de las anteriores formas de representación popular. En aquellos espacios donde los sindicatos ya no llegan –el incremento del desempleo, del trabajo precario y de la ocupación domiciliar le restaron bases sociales– y donde los partidos tradicionales dejaron de actuar como grandes agregados de la voluntad "nacionalista-popular", las demandas de la población son atendidas por instancias peculiares que genera la propia sociedad civil.

No obstante, las experiencias autogestionarias y vecinalistas abren múltiples interrogantes. Para la socióloga Maristella Svampa, responsable de la cátedra Simón Bolívar del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona, los riesgos que enfrentan estos movimientos sociales son muy altos. Svampa se pregunta: "¿Puede la política convertirse en la sola gestión de los problemas cotidianos de la gente, ignorando las definiciones más generales, que están detrás de las decisiones de más largo plazo y que tienen que ver con la idea de sociedad que tenemos y queremos?"¹⁷ Esta marca identitaria de los representantes del movimiento vecinalista –estar alejados del juego político tradicional– puede transformarse en el árbol que oculte el bosque, al no advertir que la política es una tarea colectiva que se nutre del mundo de los valores y que implica opciones, ideologías y creencias.

¹⁶ Pedro Lipcovich, "El trueque, un fenómeno que crece con la depresión de la economía", en *Página 12*, Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.

¹⁷ Citado por H. Pavón, *op. cit.* Un análisis más detallado de los cambios que afectan a las identidades sociales se encuentra en: Maristella Svampa (editora), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000.

Los riesgos que se señalan no descalifican las experiencias de democracia directa y autogestión que se describen en este artículo. El vecinalismo es un fenómeno que ha comenzado a crecer en América Latina; prácticas similares a las que se encuentran en Argentina se registran también en Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay. Con elementos particulares, dictados por la rudeza del mundo campesino en que nació, puede incluirse al "Movimiento de los Sin Tierra" en Brasil, tal vez lo más logrado en cuanto al impulso de labores productivas y prestación solidaria de servicios educativos y de salud.

Es posible que estas nuevas estructuras no sustituyan a las antiguas y, por el contrario, se articulen con ellas. El desafío, que tendrán que resolver, será la dificultad de vinculación con formas políticas de mayor alcance, provincial o nacional, sin que se diluyan su especificidad y sus valores. En este afán de crecer —en Buenos Aires se constituyó el Frente Vecinal Provincial con el fin de competir en las elecciones legislativas del 2001— se anida el riesgo de la fagocitación a partir de acuerdos que establezcan con fuerzas políticas nacionales. Renunciar a las tentaciones de la ideología parece un acto de afirmación de la pureza de las demandas ciudadanas. Sin embargo, puede significar el ingreso a un universo lúdico en el que se repliquen imágenes distorsionadas de la realidad social y de cuyos espejismos sólo se logra salir por el camino de la política.